

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA
Bogotá D. C., 29 de septiembre de dos mil veinte (2020)

Medida de Protección No. 318-2020

Radicado 2020-0313

A continuación, procede el despacho a desatar el recurso de apelación previo las siguientes,

ANTECEDENTES

El 8 de mayo de 2020 la señora LUZ MARIELA BONILLA MARTÍNEZ acudió a la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad, poniendo en conocimiento los hechos de violencia del que es víctima su progenitora ANUNCIACIÓN MARTÍNEZ DE BONILLA por parte de YOLIMA BONILLA MARTÍNEZ, donde luego de agotado el procedimiento de Ley, la Comisaría a quo, mediante providencia emitida del 14 de agosto de 2020, declaró probados los hechos de violencia intrafamiliar puesto en conocimiento.

La apoderada de la accionante interpuso recurso de apelación contra el literal h de la compulsa de copias a la señora MARIELA BONILLA MARTÍNEZ, toda vez que se encuentran medidas reciprocas las cuales pueden ser verificadas por el despacho.

Por su parte el apoderado de la accionante interpuso el recurso de apelación señalando que el despacho erro en la forma de interpretación de la violencia psicológica de acuerdo a las pruebas aportadas, toda vez que la sola enunciación no es suficiente.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

CONSIDERACIONES

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 Ibídem prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

El artículo 5º de la misma disposición contempla las medidas de protección y preceptúa: *“El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se*

tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.”.

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”,* y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”¹¹*; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Descendiendo al caso tenemos que la denunciante sostiene que la señora YOLIMA BONILLA MARTÍNEZ ha ejercido actos de violencia de carácter físico y verbal en contra de su progenitora ANUNCIACIÓN MARTÍNEZ DE BONILLA.

Sea lo primero señalar que el apoderado judicial de la accionada al interponer el recurso de apelación, manifestó que el despacho sin las pruebas necesarias sancionó a la accionada, manifestación que fuera complementada mediante escrito presentado ante la Comisaria A quo.

En tanto la accionante señaló que se debe revocar la decisión de compulsar copias ante la misma jurisdicción para que se investiguen hechos de violencia intrafamiliar por parte de la accionante hacia la señora ANUNCIACIÓN MARTÍNEZ DE BONILLA, situación que fue reiterada en

memorial presentado por la profesional del derecho ante la comisaria de familia a quo.

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 Ibídem prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

El artículo 5º de la misma disposición contempla las medidas de protección y preceptúa: *“El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.”*

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”*^[2]; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

La violencia intra-familiar en la Ley 294 de 1996 fue definida como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos incluyendo hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad familiar.

Como principales manifestaciones de la violencia psicológica, según diversos autores podemos clasificar diferentes conductas de violencia psicológica habituales en las situaciones de malos tratos:

Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, poner en tela de juicio la cordura de la víctima.

Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar, aunque sea necesario para el sostén de la familia, haciéndole pedir dinero, solicitando justificación de los gastos, dándole un presupuesto límite, haciendo la compra para que ella no controle el presupuesto, etc.

Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar amistades, restringir las relaciones con familiares, etc.

Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destruir la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo. El agresor se irrita con facilidad por cosas nimias, manteniendo a la víctima en un estado de alerta constante.

Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, hacer daño a los animales domésticos, amenazar con irse o echar al otro de casa.

Desprecio y abuso emocional: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultarle, utilización de los hijos, prácticas de privilegios masculinos. Se la denigra intelectualmente, como madre, como mujer y como persona. Negación, minimización y culpabilización.

Al confrontar los hechos denunciados por la accionante puede evidenciar el despacho el grado de afectación que ha padecido la señora ANUNCIACIÓN MARTÍNEZ DE BONILLA por parte de YOLIMA BONILLA MARTÍNEZ, que si bien, no aparecen más pruebas en el expediente para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron, también lo es que en los asuntos de violencia psicológica y en situaciones de malos tratos, en la mayoría de los casos no hay testigos u otro tipo de pruebas, porque estas agresiones se producen en el ámbito privado, es por ello que el despacho evalúa y analiza la congruencia emocional que padece la víctima, con lo relatado, determinándose claramente la situación de intranquilidad y perturbación de la accionante, siendo necesario imponer medida de protección tal y como lo hizo la comisaria a quo.

Igualmente debe considerarse que la accionante es una adulta mayor (86 años) a quien el artículo 46 de la Constitución consagra una especial protección lo cual a todas luces no se le está brindando, pues quedó demostrada la perturbación a su paz por parte de las actuaciones de la querellada, creando un clima malogrado, donde las situaciones por ella padecidas han sido reiterativas y afectan a la accionante, no siendo justo que no se le permita el desarrollo de una vejez en paz, por lo cual la medida de protección tomada en el presente asunto por la Comisaria A quo, es procedente.

Finalmente, en relación con la inconformidad de la profesional del derecho que representa los intereses de la accionante, por el hecho de que la comisaria a quo dispusiera la compulsa de copias para que se investigara si la accionante ha incurrido igualmente en acto de violencia intrafamiliar contra su progenitora, como lo afirmara en sus descargos la accionada, no puede estimarse, en sí mismo, atentatorio de los derechos fundamentales de la accionante, ni mucho menos considerarse como juzgatorio y si constituye un deber para cualquier funcionario de emitir esas órdenes cuando considere que debe investigarse una conducta de carácter policivo, disciplinario penal o como en este caso, una presunta violencia intrafamiliar.

En efecto en Sentencia T-738/07 de la Corte Constitucional señaló; “... *De los antecedentes jurisprudenciales reseñados se deriva que la decisión anexa al habeas corpus de compulsar copias a fin de que se establezcan las posibles responsabilidades de orden penal o disciplinario, si a ello hubiere lugar, atendidas las especificidades de la decisión y las circunstancias que rodearon la privación de la libertad, no entraña en sí misma una vulneración de derechos fundamentales del funcionario potencialmente investigado. En el presente caso la decisión se fundó en el imperativo del artículo 9° de la Ley 1095 de 2006 que no deja margen a la discrecionalidad y en consecuencia, no puede en sí misma considerarse arbitraria, caprichosa o producto de alguno de los errores (Fundamento 21) que determinan la procedibilidad material de acción de tutela contra decisión judicial.*”

Con base en lo expuesto el Juzgado confirma en todas sus partes la resolución emitida por la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la providencia de fecha catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020) proferida por la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad en la solicitud de incumplimiento a Medida de Protección promovida por LUZ MARIELA BONILLA MARTÍNEZ en favor de su progenitora ANUNCIACIÓN MARTÍNEZ DE BONILLA contra YOLIMA BONILLA MARTÍNEZ.

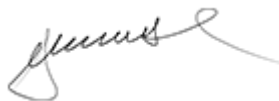
SEGUNDO: Ordenar devolver el proceso a la Comisaría Cuarta de Familia San Cristóbal I de esta ciudad.

NOTIFÍQUESE,



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ



ESTADO 65

30-09-2020

TOMAS OLAYA GONZALEZ

secretario

^[1] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html

^[2] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html